

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	0017
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2020-00025-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	SONIA ESPERANZA GUEVARA SUTA
DEMANDADA:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ASUNTO:	Resuelve recurso de reposición

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Surtido en silencio el traslado previsto en el artículo 319 del CGP, aplicable por remisión del artículo 242 del CPACA, en concordancia con el artículo 201A *ibidem*, adicionado por el artículo 51 de la Ley 2080 de 2020, se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra el auto de sustanciación No. 817 del 7 de octubre de 2022¹, que requirió a la parte demandada para que allegara unas pruebas faltantes que fueron decretadas oportuna y regularmente (fl. 269).

Mediante memorial enviado el 11 de octubre de 2022 (fls. 272 a 274), el apoderado de la parte demandada expresó su inconformidad con el requerimiento realizado en el auto referido, pues adujo que debido a la antigüedad de la información solicitada su consecución presenta dificultad, aunado al hecho de que con anterioridad al año 2016 cada hospital tenía su propia metodología de archivo, por lo que la oficina de archivo de la entidad accionada debe acoplarse a cada método empleado.

Agregó que se debe verificar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial y establecer si existe nexo causal -culposo o doloso- entre la conducta desplegada y el resultado, pues no puede endilgarse responsabilidad por la sola renuencia, precisando también que el fin del desacato es el cumplimiento de la “orden de tutela” y no la imposición de la sanción, logrando la efectividad de los derechos conculcados.

Precisó también que a pesar de ser los jefes de área los encargados de tramitar y entregar la información relacionada con los contratos de la entidad, la responsabilidad de allegar la documentación recae en el apoderado de la entidad, sobre quien surge una obligación a su cargo, y de no reponer la decisión, se debe proceder a abrir incidente en contra del togado.

Para tal efecto, es preciso recordar que el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia señala el deber de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”, disposición que para aquellos que ejercen la profesión de la abogacía ya había sido previsto en el artículo 1 del Decreto 196 de 1971, a saber:

“La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.

Ese deber de colaboración con la administración de justicia lo retomó el Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, que en el numeral 8 de su

¹ Erróneamente el recurrente señala en la parte considerativa de su escrito que solicita la reposición del auto del 15 de septiembre de 22, emitido por el Juez 51 Administrativo del Circuito de Bogotá, sin embargo, el extracto de la providencia que cita corresponde al de la proferida por este despacho el 7 de octubre de 2022; sumado a que en el acápite de las pretensiones solicita reponer el auto del 7 de octubre de 2022, y en su lugar cerrar el debate probatorio y corres traslado para alegar de conclusión.

artículo 78 señala que es deber de las partes y de sus apoderados *“prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias”*, y en caso de no brindar la asistencia puede acarrear las sanciones previstas en el artículo 60A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 14 de la Ley 1285 de 2009, así:

“Poderes del juez. Además de los casos previstos en los artículos anteriores, el Juez podrá sancionar con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus representantes o abogados, en los siguientes eventos:

(...)

4. Cuando injustificadamente no presten debida colaboración en la práctica de las pruebas y diligencias (...).”

La renuencia en colaborar en la práctica de pruebas, si así lo ordena el juez instructor, puede derivar en el uso de los poderes correccionales señalados en el numeral 3 del artículo 44 del CGP, a saber:

“Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución (...).”

Y tales sanciones se deben imponer siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 59 de la Ley 270 de 1996, así:

“El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oír las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo.”

En el caso concreto, se constata que los argumentos formulados en el recurso de reposición se dirigen a reprochar el requerimiento probatorio dispuesto en el auto censurado, al no haber considerado las circunstancias que dificultan el recaudo de la documentación solicitada, pero se aprecia que los mismos no son suficientes para revocar la decisión impugnada, por lo que el recurso será desestimado.

Nótese, que el requerimiento realizado en el auto del 7 de octubre de 2022 deviene del deber que tienen las partes y sus apoderados para la correcta administración de justicia y, con base en tal premisa constitucional, la colaboración que se debe prestar para la práctica de pruebas, luego el auto atacado no es antojadizo, pues ante la ausencia de los medios probatorios decretados en el auto interlocutorio No. 1026 dictado en la audiencia inicial celebrada el 24 de septiembre de 2021, es deber del juez adoptar las medidas necesarias para evitar la paralización y dilación del proceso (art. 42, num. 1, CGP).

Ahora, la dificultad en la consecución de los documentos por su antigüedad y las vicisitudes por la gestión documental no son plausibles si se tiene en cuenta que desde el decreto de pruebas (24 de septiembre de 2021), a la fecha del requerimiento realizado en el auto cuestionado (7 de octubre de 2022), habían transcurrido más de doce (12) meses, tiempo suficiente para la obtención de los contratos que en su momento fueron solicitados por la parte actora, cuya custodia la tiene la entidad enjuiciada; es más, dicha entidad pudo anticipar el alistamiento de los documentos contractuales de la señora Sonia Esperanza Guevara Suta, pues con anterioridad a la demanda, el 20 de agosto de 2019, a través de petición de carácter particular, la interesada solicitó la expedición de copia de todos los contratos suscritos con el Hospital Tunal E.S.E., y el Hospital Meissen II Nivel E.S.E., lo

cual permitía suponer que debió acometer esa tarea, inclusive en un plazo mayor al que se hizo referencia (fl. 32).

También debe tener en cuenta el recurrente que en este estado del proceso es prematuro calificar la actuación de la parte demandada, pues el término otorgado en el proveído del 7 de octubre de 2022 no ha fenecido aún, inclusive por virtud del recurso horizontal interpuesto, pues al tenor del inciso 4 del artículo 118 del CGP se vio interrumpido, luego no es menester analizar la conducta desplegada por las personas a quienes se les impuso la carga de allegar los documentos que en su momento se decretaron como pruebas.

Por tanto, se desestimaré la impugnación presentada, pues el requerimiento hecho tiene como fin la adecuada administración de justicia y el cumplimiento del deber de las partes en la práctica de pruebas, por lo que el incumplimiento de órdenes como la cuestionada ameritaría la aplicación de los poderes correccionales del juez y las sanciones que el legislador previó para ese tipo de proceder.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto el 11 de octubre de 2022 por la parte demandada y, por ende, mantener incólume el auto de sustanciación No. 817 del 7 de octubre de 2022, que requirió a la parte demandada para que allegara unas pruebas faltantes que fueron decretadas oportuna y regularmente.

Los memoriales de los apoderados de las partes deben ser enviados únicamente al correo electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales deberán contener los 23 dígitos del proceso, el juzgado al cual se dirige, las partes y no podrá exceder 5000 KB.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

KPG

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 14056afa585ef6de91fcb359d04d6ea7a660b62db9406a34cab742c7d0a05aeb
Documento generado en 16/01/2023 03:52:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>